

Antofagasta, a diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTOS:**

En estos autos sobre juicio ordinario seguido ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad, en causa rol C-2162-2021, caratulado "Municipalidad de Antofagasta con Cortés Olivares, Misael y otros", por sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el juez suplente don Iván Mauricio Pereira Arriagada, se declaró lo siguiente: I.- SE ACOGE la excepción de prescripción opuesta por don Claudio Javier Núñez Cortés y doña María Angélica Rojas Gutiérrez, y en consecuencia SE RECHAZA la demanda a su respecto; II.- SE ACOGE parcialmente la demanda interpuesta con fecha 15 de septiembre del 2021, en cuanto los demandados don Misael Antonio Cortes Olivares y de don Richard Phillip Swaneck Ramírez, deberán pagar a la parte demandante, en forma solidaria, la siguiente suma, por concepto de indemnización de perjuicios por los daños ocasionados a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta: \$421.809.510.- (cuatrocientos veintiún millones ochocientos nueve mil quinientos diez pesos), por concepto de daño emergente; III.- La suma antes referida deberá liquidarse en su oportunidad, aplicándose los intereses y reajustes que correspondan entre la fecha en que quede ejecutoriado el fallo y la fecha de pago; IV.- Se condena en costas a los demandados don Misael Antonio Cortes Olivares y don Richard Phillip Swaneck Ramírez. El resto de las partes pagará cada uno sus costas.

En contra de esta sentencia se alzó la parte demandante deduciendo recurso de apelación, solicitando en definitiva revocarla en aquella parte que acogió la excepción perentoria de prescripción extintiva respecto de don Claudio Javier Núñez Cortés y doña María Angélica Rojas Gutiérrez, y en su lugar declare que se rechaza dicha excepción y que se acoge la demanda respecto de dichos demandados en todas sus partes, con costas.

Por su parte, el demandado Misael Antonio Cortés Olivares se adhirió a la apelación solicitando que se confirme la



sentencia definitiva con declaración que declare también la prescripción de la acción indemnizatoria de responsabilidad civil extracontractual deducida en su contra.

Asimismo, en esta instancia dicho demandado deduce excepción de prescripción.

Se ordenó traer los autos en relación y se procedió a la vista de la causa, alegando los abogados de las partes.

**CONSIDERANDO:**

Dando por reproducida la sentencia en alzada, salvo el considerando quinto en sus párrafos sexto inclusive en adelante y el considerando duodécimo, que se suprimen.

Eliminando en el considerando sexto párrafo primero las expresiones *"del resto"* y *"a saber, don Misael Antonio Cortes Olivares y de don Richard Phillip Swaneck Ramírez, quienes no han comparecido a estos autos a oponer defensa o alegación alguna"*.

Excluyendo en el considerando décimo párrafo tercero la expresión *"que no han comparecido a alegar la prescripción"*.

**Y TENIENDO, ADEMAS Y EN SU LUGAR, PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que atendido el tenor de las peticiones concretas de la apelación, de la adhesión a la apelación y de la excepción opuesta, los únicos puntos revisables en esta instancia son, respecto de la demanda deducida en contra de don MISHAEL ANTONIO CORTÉS OLIVARES, la eventual concurrencia de los presupuestos de la excepción de prescripción (atendida la naturaleza de las peticiones se efectuará primero el pronunciamiento sobre la excepción para, acto seguido, pronunciarse de la adhesión), sin que pueda extenderse pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda a su respecto, del monto de la indemnización y sus características, y tampoco de su exención del pago de las costas, y respecto del demandado don CLAUDIO JAVIER NÚÑEZ CORTÉS y de la demandada doña MARÍA ANGÉLICA ROJAS GUTIÉRREZ, acerca de la concurrencia de los presupuestos de la prescripción declarada y cuestionada, y en caso de acogerse la apelación, acerca de la procedencia de



condenarlos al pago de la indemnización, su monto y forma de cobro y pago, incluyendo la eventual condena en costas.

Cabe tener presente que respecto del demandado RICHARD PHILLIP SWANECK RAMÍREZ ningún pronunciamiento puede efectuarse en esta instancia al no tener relación aquel con ninguna de las cuestiones sometidas a la revisión de esta Corte, por no ser objeto del cuestionamiento de las apelaciones lo resuelto respecto del mismo.

**EN CUANTO A LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION DEDUCIDA EN ESTA INSTANCIA POR DON MISAEAL ANTONIO CORTÉS OLIVARES:**

**SEGUNDO:** Que el demandado MISAEAL ANTONIO CORTÉS OLIVARES deduce excepción de prescripción respecto de la acción de indemnización por responsabilidad extracontractual derivada de condena penal, fundado en que transcurrieron más de cuatro años desde la época de los hechos hasta la fecha de notificación de la demanda, y que si bien se adoptaron medidas durante el proceso penal que pudieron significar interrumpir la prescripción, transcurrieron más de sesenta días desde que quedó ejecutoriada la sentencia dictada en dicha causa, por lo que la prescripción de la acción civil debe considerarse como no interrumpida por el ejercicio de la acción penal, por lo que debe contarse el plazo de prescripción desde que empezó a correr.

**TERCERO:** Que si bien respecto del delito en cuestión, por el cual fueron condenados los demandados como autores del mismo, se desarrolló una causa penal en la cual se adoptaron medidas durante el proceso penal que pudieron significar interrumpir la prescripción de la responsabilidad civil por la vía de preparar esta acción, lo cierto es que, como bien lo asienta la sentencia apelada, transcurrieron más de sesenta días desde que quedó ejecutoriada la sentencia dictada en dicha causa y se presenta la demanda civil que genera este juicio, por lo que, y dando por reproducido lo asentado en la sentencia recurrida sobre este punto, debe tenerse por sentado que la prescripción de la acción civil debe considerarse como no interrumpida por el ejercicio de la acción penal, como tampoco



por la preparación de la acción civil efectuada en la causa penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal Penal, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo Código, por lo que debe contarse el plazo de prescripción desde que cesó la comisión del ilícito en cuestión.

Por lo mismo, la presentación de querellas por si sola no produce ningún efecto para resolver la prescripción alegada, sino fuera porque puede ser considerada una confesión judicial y derivar algún efecto de esta en cuanto tal.

**CUARTO:** Que, excluido lo dispuesto en las normas antes indicadas para resolver el conflicto por lo ya dicho y decidir el punto en cuestión debe estarse a lo dispuesto en los artículos 2.332 y 2.518 del Código Civil.

El primero refiere que *"las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto"*.

El segundo indica que *"La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente."*

*Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente."*

*Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503"*.

**QUINTO:** Que apareciendo en esta causa que el demandado fue notificado de la presente acción con fecha 1° de abril de 2022, hito que produce la interrupción civil de la prescripción, debe en primer lugar establecerse la fecha del delito para, primero, computar el plazo y así concluir si aquel alcanzó a completarse hasta la interrupción civil y, segundo, determinar si dentro de dicho plazo ocurrió algún otro hecho que interrumpió naturalmente la prescripción.

**SEXTO:** Que para establecer la fecha del delito, cabe tener presente que en la presente causa se persigue la responsabilidad civil proveniente del delito de malversación de caudales públicos por el cual los demandados Misael Antonio Cortés Olivares, Claudio Javier Núñez Cortés y María Angélica



Rojas Gutiérrez fueron condenados por sentencia de fecha 9 de abril de 2021, que quedó ejecutoriada con fecha 20 del mismo mes, por los hechos ocurridos entre los años 2016 y 2017, según indica en su parte resolutive la sentencia dictada en la causa RIT 12692-2017, RUC 1710047476-K, del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Los hechos que se dieron por establecidos en dicha sentencia son los siguientes:

*"Que, con ocasión de una denuncia efectuada por un Sr. Concejal de Antofagasta se indagó en la Unidad de Control de la Municipalidad de Antofagasta el pago de recaudación efectuado el año 2015 por la Sociedad Helénica de Socorros Mutuos para adquirir un terreno en el Cementerio Municipal de esta ciudad, que no fue ingresado a las arcas municipales, por la suma de \$3.000.000, que recibió y se apropió el Sr. Administrador del Campo Santo, MISAEL CORTES OLIVARES, aprovechando su cargo y función, siendo este hecho irregular puesto en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, que inició un proceso especial de auditoría al Cementerio Municipal de Antofagasta, ubicado en calle Andrés Sabella N° 3250, como servicio dependiente de la Dirección de Servicios de Salud y Educación de la Municipalidad de Antofagasta, descubriendo en la revisión de 428 carpetas de construcción del camposanto local, asociadas a operaciones realizadas entre el año 2015 al 2017, que existían 177 comprobantes de recaudación fechados entre los años 2015 y 2017, a nombre de distintas personas y con diversos números y montos, siendo el monto menor \$129.679 y el mayor \$7.310.408, por concepto de ventas de derechos de terrenos y de construcción por los mismos, por un monto total de \$269.038.241.-, que no fueron informados en las cajas diarias de recaudación preparadas por el cementerio, ni incorporadas en los registros contables para su posterior ingreso en las arcas de la Municipalidad de Antofagasta.*

*Que los dineros antes señalados fueron apropiados de forma indebida e ilegítimamente por el mismo Administrador del Cementerio Municipal, de ese lapso de tiempo, Sr. MISAEL CORTES*



OLIVARES, que fuera nombrado en tal cargo por decreto municipal N° 331/2012 del 31 de diciembre de 2012, quien para estos fines ilícitos actuó en algunas oportunidades personal e individualmente vendiendo los derechos de terrenos y de construcción, recibiendo los dineros, y quedándose con los mismos, que no ingresó en las cajas del cementerio ni rindió a la Tesorería de la Municipalidad, y en otras oportunidades con el mismo objetivo concertado previamente y con la colaboración de los restantes imputados Sra. MARIA ANGELICA ROJAS GUTIERREZ, en su calidad de Sub Administradora del Cementerio Municipal, nombrada en tal cargo por Decreto Municipal N° 88/2013 del 15 de febrero de 2013; del Sr. CLAUDIO JAVIER NUÑEZ CORTES, en su calidad de encargado de ventas de dicho cementerio, nombrado en tal cargo por Decreto Municipal N° 132/2009 del 16 de junio de 2009; y del Sr. RICHARD PHILLIP SWANECK RAMIREZ como funcionario municipal (encargado de proyectos del Cementerio Municipal) conforme a contratos de plazo y prórrogas, aprobados por decretos municipales N° 303/2015, 644/2015 y 313/2016) y contratista del mismo campo santo.

Que, en efecto, el imputado CORTES OLIVARES para lograr sustraer y apropiarse de los dineros y a la vez defraudar y perjudicar a la Municipalidad, aprovechando su cargo de administrador y la función inherente al mismo, e incumpliendo el deber de cuidado de los recursos de la institución que administraba, como encargado de los fondos municipales del Campo Santo, y previamente concertado en algunas oportunidades con los restantes imputados, como antes se ha indicado, ofrecían a terceros la venta de terrenos del Cementerio al valor respectivo o a veces a un monto inferior a dicho valor, que conforme a sus características y ubicación podía alcanzar hasta el 50% menos del valor, exhibiendo los terrenos e informando sus especificaciones, para a continuación proceder a su venta, proporcionando a los compradores los respectivos comprobantes de recaudación por el valor convenido cancelado en dinero efectivo generalmente, sea por la venta efectuada o bien por el pago de derechos asociados a construcción u otras



materias, que se pagaban cuyas copias de recaudación luego agregaban a las carpetas de construcción, sustrayendo y apropiándose de los dineros que recibían ilegítimamente como recaudación, que constituían fondos públicos de carácter municipal, que después se repartían entre aquéllos en varias ocasiones, sin ingresar en arcas municipales los acusados CORTES OLIVARES, ROJAS GUTIERREZ, NUÑEZ CORTES y SWANECK RAMIREZ los dineros recibidos por aquellos u obtenidos, o en cuya negociación intervenían, según cual fuera el caso, como encargados de dichos fondos, por la naturaleza de sus cargos y la función que desempeñaban; o bien, entregarlos o rendirlos a la Municipalidad de Antofagasta, causando perjuicio en principio al ente municipal por la suma de \$269.038.241, que nunca recibió por la venta de terrenos y derechos de construcción asociados a los mismos, perjuicio que finalmente debe complementarse y ampliarse a la suma total de \$ 421.809.510.- con motivo de pericias contables efectuadas por peritos de LACRIM que adicionaron el número de comprobantes de recaudación a 254, en igual lapso de tiempo, cuyo monto de dinero que dan cuenta -asimismo- fueron apropiados en la misma forma antes descrita por los acusados y no enterados en su momento en arcas municipales.

Los talonarios de comprobantes de recaudación utilizados por los acusados fueron en gran parte obtenidos de forma clandestina e ilícita por el Sr. CORTES OLIVARES, aprovechando el cargo y función que desempeñaba, puesto que correspondían a talonarios de recaudación del Cementerio Municipal que habían sobrado del ejercicio anual y que debían destruirse, lo que no hacía y empleaba con los restantes acusados para su venta.

Finalmente, realizados informes periciales contables pudo determinarse que la acusada María Angélica Rojas Gutiérrez recibió de parte del acusado Misael Cortés, con ocasión de la apropiación de fondos antes relatada, un total de 33 transferencias de fondos en su cuenta corriente del Banco BCI y Santander por la suma total de \$34.126.000. En tanto, el acusado Richard Swaneck Ramírez recibió del acusado Cortés un



total de 13 transferencias de fondos en su cuenta corriente del Banco BCI por la suma total de \$5.473.000. Finalmente, el acusado Claudio Nuñez Cortés recibió de parte del acusado Cortés un total de 1 transferencia de fondos en su cuenta corriente del Banco Falabella por la suma total de \$750.000.

Asimismo, se tuvo por establecido también en la sentencia los hechos materia de la acusación particular, que son los siguientes:

"Que, con ocasión de una denuncia efectuada por un Sr. Concejal de Antofagasta se indagó en la Unidad de Control de la Municipalidad de Antofagasta el pago de recaudación efectuado el año 2015 por la Sociedad Helénica de Socorros Mutuos para adquirir un terreno en el Cementerio Municipal de esta ciudad, que no fue ingresado a las arcas municipales, por la suma de \$3.000.000, que recibió y se apropió el Sr. Administrador del Campo Santo, MISAEL CORTES OLIVARES, aprovechando su cargo y función, siendo este hecho irregular puesto en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, que inició un proceso especial de auditoría al Cementerio Municipal de Antofagasta, ubicado en calle Andrés Sabella N° 3250, como servicio dependiente de la Dirección de Servicios de Salud y Educación de la Municipalidad de Antofagasta, descubriendo en la revisión de 428 carpetas de construcción del camposanto local, asociadas a operaciones realizadas entre el año 2015 al 2017, que existían 177 comprobantes de recaudación fechados entre los años 2015 y 2017, a nombre de distintas personas y con diversos números y montos, siendo el monto menor \$129.679 y el mayor \$7.310.408, por concepto de ventas de derechos de terrenos y de construcción por los mismos, por un monto total de \$269.038.241.-, que no fueron informados en las cajas diarias de recaudación preparadas por el cementerio, ni incorporadas en los registros contables para su posterior ingreso en las arcas de la Municipalidad de Antofagasta.

Que los dineros antes señalados fueron apropiados de forma indebida e ilegítimamente por el mismo Administrador del Cementerio Municipal, de ese lapso de tiempo, Sr. MISAEL CORTES



OLIVARES, que fuera nombrado en tal cargo por decreto municipal N° 331/2012 del 31 de diciembre de 2012, quien para estos fines ilícitos actuó en algunas oportunidades personal e individualmente vendiendo los derechos de terrenos y de construcción, recibiendo los dineros, y quedándose con los mismos, que no ingresó en las cajas del cementerio ni rindió a la Tesorería de la Municipalidad, y en otras oportunidades con el mismo objetivo concertado previamente y con la colaboración de los restantes imputados Sra. MARIA ANGELICA ROJAS GUTIERREZ, en su calidad de Sub Administradora del Cementerio Municipal, nombrada en tal cargo por Decreto Municipal N° 88/2013 del 15 de febrero de 2013; del Sr. CLAUDIO JAVIER NUÑEZ CORTES, en su calidad de encargado de ventas de dicho cementerio, nombrado en tal cargo por Decreto Municipal N° 132/2009 del 16 de junio de 2009; y del Sr. RICHARD PHILLIP SWANECK RAMIREZ como funcionario municipal (encargado de proyectos del Cementerio Municipal) conforme a contratos de plazo y prórrogas, aprobados por decretos municipales N° 303/2015, 644/2015 y 313/2016) y contratista del mismo campo santo.

Que, en efecto, el imputado CORTES OLIVARES para lograr sustraer y apropiarse de los dineros y a la vez defraudar y perjudicar a la Municipalidad, aprovechando su cargo de administrador y la función inherente al mismo, e incumpliendo el deber de cuidado de los recursos de la institución que administraba, como encargado de los fondos municipales del Campo Santo, y previamente concertado en algunas oportunidades con los restantes imputados, como antes se ha indicado, ofrecían a terceros la venta de terrenos del Cementerio al valor respectivo o a veces a un monto inferior a dicho valor, que conforme a sus características y ubicación podía alcanzar hasta el 50% menos del valor, exhibiendo los terrenos e informando sus especificaciones, para a continuación proceder a su venta, proporcionando a los compradores los respectivos comprobantes de recaudación por el valor convenido cancelado en dinero efectivo generalmente, sea por la venta efectuada o bien por el pago de derechos asociados a construcción u otras



materias, que se pagaban cuyas copias de recaudación luego agregaban a las carpetas de construcción, sustrayendo y apropiándose de los dineros que recibían ilegítimamente como recaudación, que constituían fondos públicos de carácter municipal, que después se repartían entre aquéllos en varias ocasiones, sin ingresar en arcas municipales los acusados CORTES OLIVARES, ROJAS GUTIERREZ, NUÑEZ CORTES y SWANECK RAMIREZ los dineros recibidos por aquellos u obtenidos, o en cuya negociación intervenían, según cual fuera el caso, como encargados de dichos fondos, por la naturaleza de sus cargos y la función que desempeñaban; o bien, entregarlos o rendirlos a la Municipalidad de Antofagasta, causando perjuicio en principio al ente municipal por la suma de \$269.038.241, que nunca recibió por la venta de terrenos y derechos de construcción asociados a los mismos, perjuicio que finalmente debe complementarse y ampliarse a la suma total de \$ 421.809.510.- con motivo de pericias contables efectuadas por peritos de LACRIM que adicionaron el número de comprobantes de recaudación a 254, en igual lapso de tiempo, cuyo monto de dinero que dan cuenta -asimismo- fueron apropiados en la misma forma antes descrita por los acusados y no enterados en su momento en arcas municipales.

Los talonarios de comprobantes de recaudación utilizados por los acusados fueron en gran parte obtenidos de forma clandestina e ilícita por el Sr. CORTES OLIVARES, aprovechando el cargo y función que desempeñaba, puesto que correspondían a talonarios de recaudación del Cementerio Municipal que habían sobrado del ejercicio anual y que debían destruirse, lo que no hacía y empleaba con los restantes acusados para su venta.

Finalmente, realizados informes periciales contables pudo determinarse que la acusada María Angélica Rojas Gutiérrez recibió de parte del acusado Misael Cortés, con ocasión de la apropiación de fondos antes relatada, un total de 33 transferencias de fondos en su cuenta corriente del Banco BCI y Santander por la suma total de \$34.126.000. En tanto, el acusado Richard Swaneck Ramírez recibió del acusado Cortés un



*total de 13 transferencias de fondos en su cuenta corriente del Banco BCI por la suma total de \$5.473.000. Finalmente, el acusado Claudio Núñez Cortés recibió de parte del acusado Cortés un total de 1 transferencia de fondos en su cuenta corriente del Banco Falabella por la suma total de \$750.000."*

**SÉPTIMO:** Que, atendido lo dispuesto en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, los hechos referidos, su calificación jurídica y la responsabilidad de los condenados deben tenerse por ciertos en esta causa, máxime cuando las partes de aquello lo fueron también en la causa penal antes señalada, lo que en el punto en cuestión permite tener por acreditado que el delito, en cuanto hecho único compuesto de diversos actos atomizados, se cometió entre los años 2015 a 2017.

**OCTAVO:** Que, dicho lo anterior, establecido que fue que el delito se terminó de cometer en el año 2017, sea cual sea la fecha en dicho año, considerando que el demandado MISAELE ANTONIO CORTÉS OLIVARES fue notificado de la demanda el día 1° de abril de 2022, transcurrió en exceso el plazo de cuatro años, por lo que la cuestión a resolver se limita a definir si dentro de dicho plazo existió algún hecho que interrumpiera civilmente la prescripción y, en el caso en concreto, como se alega por la actora, si en dicho espacio de tiempo existió reconocimiento de los hechos y consignaciones para reparar el mal causado, y si dichas acciones pueden ser consideradas como un acto que interrumpe naturalmente la prescripción.

**NOVENO:** Que con relación al eventual efecto que pueda tener el realizar una consignación en la causa penal para reparar el mal causado por el delito, en relación a interrumpir naturalmente la prescripción, cabe tener presente que dicho acto es una manifestación expresa de quien la realiza para corregir o enmendar en parte el perjuicio que ocasionó su obrar ilícito, la cual implica un reconocimiento de la existencia de una deuda producto de su acción delictiva, siendo suficiente en consecuencia para interrumpir naturalmente la prescripción de las acciones civiles provenientes del delito.



Por lo demás así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en las causas roles 152.957-2022, 233.971-2023 y 222.793-2023, en las cuales señaló que *"la consignación de dinero en una causa en que se es condenado por una malversación de caudales públicos, en la cual, además, se está aceptando ser el autor de tal ilícito es, de manera evidente, un hecho que importa un reconocimiento de tal responsabilidad y que, en tal Centro Documental calidad, tiene incidencia en la renovación del plazo de prescripción"*.

**DÉCIMO:** Que con relación al eventual efecto que pueda tener el aceptar los hechos en el procedimiento abreviado en la causa penal para interrumpir la prescripción de la acción civil que persigue reparar el perjuicio económico causado por el delito, cabe tener presente que conforme se indica también en las sentencias citadas en el considerando anterior, tal actuación produce dicho efecto, y no podría ser de otra forma desde que al aceptar la existencia del hecho y derivando el perjuicio del mismo, el reconocimiento alcanza a la obligación civil subyacente, todo ello siempre y cuando el hecho reconocido establezca el monto del perjuicio causado por el delito, desde que es precisamente el cobro de la indemnización de dicho perjuicio lo que se solicita en causas como la presente.

**UNDÉCIMO:** Que, considerando que el procedimiento abreviado tuvo lugar el día 5 de abril de 2021, para los efectos de resolver la cuestión relativa a la interrupción de la prescripción ya sea por la consignación para reparar el mal causado, o por la aceptación de los hechos, resulta relevante establecer en qué fecha se terminó de cometer el delito en cuestión, situación que no fue establecida con precisión en la sentencia penal, y que, en consecuencia, debe dilucidarse en esta causa al tenor de la prueba rendida.

Así las cosas, el primer elemento a considerar es la fecha indicada en la querella, no porque dicha actuación produzca el efecto de interrumpir la prescripción (lo que no es así porque aquello se produce sólo con la preparación de la acción civil en sede penal), sino porque aquel instrumento puede contener



una confesión judicial en causa diversa del actor, en cuanto aquello eventualmente podría beneficiar a la contraparte.

Dicho lo anterior, cabe considerar que la querella fue interpuesta el día 30 de noviembre de 2017, indicándose que "el Cementerio Municipal de Antofagasta recaudó ingresos por venta de derechos de terrenos y construcción, equivalentes a \$269.038.241, que no fueron incorporados en la cuenta corriente del municipio, asociados a 177 comprobantes de recaudación, corresponden a operaciones ejecutadas en los años 2015, 2016 y hasta el 17 de julio de 2017".

Un segundo elemento para considerar es que, de los antecedentes acompañados, en especial de las copias de la carpeta investigativa (que incluye, en forma desordenada, informes policiales, peritajes, informe de Contraloría y comprobantes que dan cuenta de las transacciones en cuestión), no se advierten hechos constitutivos del delito del cual emana la acción civil deducida en esta causa posteriores al mes de julio de 2017.

Cabe tener presente que la denuncia efectuada por la Contraloría General de la República al Ministerio Público es del 12 de julio de 2017, según documento agregado a la carpeta de investigación, fecha en la cual ya no era administrador del Cementerio el demandado Cortés Olivares, siendo claro del informe de la investigación administrativa que la Municipalidad tomó conocimiento de estos hechos en mayo de 2017 y, conforme aparece del finiquito que está en la referida carpeta, que dicha persona presentó su renuncia el 31 de aquel mes, suscribiéndose el finiquito el 5 de julio de 2017, lo que deja patente que a esa fecha no resultaba posible continuaran con las acciones delictivas, desde que el ilícito y forma de operar había sido descubierta, existía una investigación administrativa primero y penal después, se requirió información a la demandada señora Rojas en el intertanto, provocando incluso el término del contrato del principal autor, el señor Cortés, de lo cual surgen un conjunto de presunciones que permiten tener por establecido como fecha de término de los



hechos delictivos el día 12 de julio de 2017, sobre todo considerando que en el conjunto de operaciones ilícitas aparecen algunas de mayo, junio y principios de julio de 2017.

Si bien la Policía de Investigaciones en los peritajes realizados encuentra algunas operaciones con el mismo modus operandi posteriores, indica expresamente que en ellas no pudo participar el señor Cortés, por lo que estima esta Corte, no altera lo resuelto.

**DUODÉCIMO:** Que, dicho todo lo anterior, en relación al imputado Misael Cortés, si bien este demandado no efectuó consignación para reparar el mal causado, como aparece de la causa penal tenida a la vista, por lo que la primera alegación acerca de la interrupción de la prescripción debe ser rechazada, lo cierto es que aquel en el juicio abreviado aceptó los hechos materia de la acusación, los que, como se aprecia en lo antes transcrito, implica aceptar que cometió el delito por el cual fue condenado *"causando perjuicio en principio al ente municipal por la suma de \$269.038.241, que nunca recibió por la venta de terrenos y derechos de construcción asociados a los mismos, perjuicio que finalmente debe complementarse y ampliarse a la suma total de \$ 421.809.510.- con motivo de pericias contables efectuadas por peritos de LACRIM que adicionaron el número de comprobantes de recaudación a 254, en igual lapso de tiempo, cuyo monto de dinero que dan cuenta -asimismo- fueron apropiados en la misma forma antes descrita por los acusados y no enterados en su momento en arcas municipales"*.

En consecuencia, es claro que el demandado en cuestión al aceptar los hechos materia de la acusación, admitió los hechos que se califican como delito y su participación en calidad de autor del único delito materia de la condena, conformado este por diversas acciones, como asimismo asintió haber causado el perjuicio que se pide indemnizar, lo que implica reconocer el deudor el hecho del cual emana su responsabilidad y el perjuicio causado con el mismo, es decir reconoce la obligación demandada expresamente en la audiencia de procedimiento



abreviado, lo que tuvo lugar el 5 de abril de 2021, lo que implica que operó la interrupción natural de la prescripción ya que reconoció tácitamente la deuda antes de cumplirse los cuatro años contados desde los hechos (e inclusive habrían transcurrido si se estimase que el hecho término el día de la renuncia del señor cortés), con lo cual se perdió el tiempo anterior, y teniendo lugar a su respecto la notificación de la demanda civil el día 1° de abril de 2022, a menos de un año del hecho que interrumpió anteriormente, no cabe sino concluir que no se completó el plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual proveniente del delito antes indicado.

Por todo lo anterior, debe rechazarse la excepción de prescripción interpuesta en esta instancia por don Misael Antonio Cortés Olivares, sin costas por estimar que tuvo motivo plausible para litigar atendido lo resuelto en primera instancia respecto de los otros demandados, y la poca claridad sobre la época de los hechos que surge de la sentencia condenatoria, sin que la actora, querellante en dicha instancia penal, haya contribuido a ello en su querella.

**EN CUANTO A LA ADHESION A LA APELACIÓN RESPECTO DEL DEMANDADO MISAEL ANTONIO CORTÉS OLIVARES:**

**DECIMOTERCERO:** Que en relación a la adhesión a la apelación del referido demandado, considerando que el fundamento de la misma es sólo la prescripción alegada, lo que, por las razones antes expuesta debe ser rechazada, y considerando que dicho recurrente no cuestiona en el recurso su responsabilidad civil extracontractual, ni el monto de la indemnización, ni la forma en que es obligado a su pago, no resulta posible modificar lo resuelto por el Tribunal a quo a su respecto, a no otorgar competencia sobre dichos puntos los cuestionamientos presentados, por lo que en este punto se confirmará la sentencia en alzada.

En todo caso, considerando que el monto de lo defraudado acreditado con los peritajes agregados a la investigación penal, acompañada a esta causa, que dicho monto además se establece como monto de los perjuicios del delito cometido en



forma principal por el referido demandado en la sentencia penal que produce cosa juzgada en esta causa, y reconociendo este su participación en las declaraciones que rolan en la indicada investigación, resulta del todo acreditado en todo caso la responsabilidad en virtud de la cual se le demanda y el perjuicio causado, lo que constituye una nueva razón para confirmar la sentencia a su respecto.

Por último, cabe considerar que, habiendo sido absuelto el demandado en cuestión del pago de las costas de la causa, teniendo presente que el demandante nada cuestionó del fallo respecto a ese punto, no puede alterarse esta decisión en esta instancia, no estimándose procedente condenar al pago de las costas del recurso a su respecto, por las razones dadas al eximir de costas al resolver la excepción.

**EN CUANTO A LA APELACION DE LA PARTE DEMANDANTE EN RELACION A LA DEMANDADA MARÍA ANGÉLICA ROJAS GUTIÉRREZ:**

**DECIMOCUARTO:** Que la apelación se deduce a su respecto en relación con aquella parte de la sentencia que acoge la excepción de prescripción, solicitando el demandante rechazar la misma y acoger la demanda a su respecto.

En consecuencia, en relación con la referida demandada se analizará primero la concurrencia o no de los presupuestos de la excepción y, en caso de desecharse, se analizará la procedencia de que esta sea condenada a indemnizar, por qué monto y la naturaleza y características de su obligación.

**DECIMOQUINTO:** Que, para pronunciarse sobre la excepción de prescripción, cabe tener presente que la demandada fue condenada por el mismo delito y en forma conjunta con el demandado Misael Cortes, en base a los mismos hechos, por lo que, en relación a las fecha a considerar para contabilizar el inicio del plazo de prescripción, se estará a lo ya indicado sobre el punto, lo que se da por expresamente reproducido.

Cabe tener presente que de la prueba rendida a su respecto tampoco existe mérito para estimar que el hecho es más acotado, sobre todo considerando que al declarar don Misael Cortés indica que las acciones delictivas las realizaban de acuerdo



con ella y que, en todo caso, según consta de sus contratos, se desempeñó como cajera y administrativa, como encargada de terreno y al término de los hechos como encargada de venta, todo en el cementerio en cuestión, y en tal condición tenía la obligación de indicar como pagar por caja a los usuarios, por lo que su participación fue condición necesaria para la comisión del hecho, más allá del beneficio económico total que obtuvo, todo lo cual lleva a concluir que resulta acertada la sentencia penal al condenarla por el mismo delito y como hecho único compuesto de varias acciones, por lo que no cabe sino rechazar las alegaciones efectuadas por su defensa en cuanto a que el hecho sería más acotado a su respecto.

**DECIMOSEXTO:** Que, así las cosas, dando por reproducida la normativa aplicable en materia de prescripción antes transcrita y los efectos de la aceptación de los hechos en el procedimiento abreviado ya referido en esta sentencia, y excluido que fue el mérito de la preparación de la acción civil en la causa penal para interrumpir la prescripción, teniendo presente que el delito a su respecto terminó de cometerse el día 12 de julio de 2017, es claro que la demandada en cuestión, al aceptar los hechos materia de la acusación, los antecedentes de investigación y el procedimiento abreviado, admitió como ciertos los hechos imputados conformado por diversas acciones desarrolladas en el tiempo, los que ahora sustentan la indemnización demandada, como asimismo aceptó o reconoció haber causado el perjuicio que se pide indemnizar, lo que implica reconocer el deudor el hecho del cual emana su responsabilidad y el perjuicio causado con el mismo, es decir reconoce la obligación demandada expresamente en la audiencia de procedimiento abreviado, lo que tuvo lugar el 5 de abril de 2021, lo que implica que operó la interrupción natural de la prescripción al reconocer tácitamente la deuda antes de cumplirse los cuatro años contados desde los hechos (e inclusive habrían transcurrido menos de cuatro años si se estimase que el hecho terminó el día que alega la defensa al contestar la demanda, esto es el 8 de mayo de 2017, fecha en



que según indica fue la última vez que percibió dinero del ilícito), con lo cual se perdió el tiempo anterior, y teniendo lugar a su respecto la notificación de la demanda civil el día el 25 de noviembre del 2021, a menos de ocho meses del hecho que interrumpió anteriormente, no cabe sino concluir que no se completó el plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual proveniente del delito antes indicado.

Que respecto de esta imputada tampoco existe consignación para reparar el mal causado que considera, como consta de la causa y sentencia penal y de la carpeta de investigación, por lo que nada se analizará en este punto.

Por todo lo anterior, debe rechazarse la excepción de prescripción interpuesta por María Angélica Rojas Gutiérrez, al haber tenido lugar, primero un hecho que produce interrupción natural y después un hecho que produce interrupción civil, todos ello antes de concretarse el plazo de prescripción, por lo que se revocará a este respecto la sentencia apelada, sin costas por estimar que la demandada tuvo motivo plausible para litigar, atendido lo resuelto en primera instancia y la poca claridad sobre la época de los hechos que surge de la sentencia condenatoria, sin que la actora, querellante en dicha instancia penal, haya contribuido a ello en su querella, acusación y actuaciones en la causa, y es más, habiéndose perdido la interrupción provocada en la tramitación de la causa penal por su propia falta de diligencia al retardar la presentación de esta demanda.

**DECIMOSÉPTIMO:** Que, dicho lo anterior, establecida la existencia del delito y su responsabilidad como autora del mismo en tanto fue condenada, lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil produce en esos puntos el efecto de cosa juzgada en esta causa, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, considerando que, con los parámetros indicados en la sentencia en alzada, la demandada es capaz de delito o cuasidelito civil, es adulto plenamente capaz, que ha realizado un acto que ha causado un daño a la demandante, persona



jurídica cuyo patrimonio fue afectado, incluso penalmente, la demandada actuó con dolo (fue condenada como autora de delito) y que existe un nexo causal entre el hecho doloso y el daño que se pide indemnizar; debe entonces la demandada indemnizar a la parte demandante por los perjuicios causados con el ilícito, siendo claro que tiene el carácter de daño emergente, el monto por el cual se produjo la apropiación, debiendo la indemnización ser equivalente a ese monto.

En cuanto al monto de la indemnización, establecido que fue en la sentencia penal que esta demandada, junto a otros dos demandados, participaron en un hecho único compuesto de varias acciones que produjeron la apropiación de un monto total en cuyo valor fue perjudicada la demandante, y establecido que fue de la misma forma que dicho monto ascendió a la suma de \$ 421.809.510, debe declararse que el monto de la indemnización es de tal cantidad, acogiendo en consecuencia la demanda a este respecto, con los mismos reajuste e intereses fijados, no cuestionados por las partes en sus recursos.

Respecto de la alegación efectuada por la demandada en cuestión, en relación a que sólo debe responder del monto que percibió como utilidad, cabe tener presente que el artículo 2317 del Código Civil dispone que si un delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable **"de todo perjuicio procedente del mismo delito"**, insistiendo después que todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso, dejando patente que todos los autores responden de todo el perjuicio causado por el ilícito y no sólo del monto del beneficio personalmente recibido, por lo que debe desecharse la referida defensa.

En todo caso, refuerza dicho argumento lo dispuesto en el artículo 2316 de dicho código, el que al disponer que también responde el heredero y el que recibe provecho del dolo ajeno sin ser cómplice o autor, limita su responsabilidad hasta la concurrencia de lo que valga su provecho, dejando patente a



contrario sensu que todo autor o cómplice del delito, responde solidariamente por el total del perjuicio.

**DECIMOCTAVO:** Que se cuestiona por la defensa de esta demandada que la sentencia del procedimiento abreviado no produce los efectos del referido artículo 178, al no haberse probado los hechos, defensa que debe ser desechada por carecer de fundamento normativo.

En efecto, la referida norma no limita sus efectos a la sentencia del juicio oral penal o a la sentencia que se funde en la aceptación de responsabilidad penal, sino sólo exige que exista sentencia condenatoria, como en este caso, siendo relevante que en el procedimiento abreviado para condenar al imputado se requiere la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la carpeta de investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 406 inciso segundo del Código Procesal Penal, con lo cual se hace innecesario que el tribunal perciba directamente la prueba al reconocer el imputado la ya existente, convirtiendo el proceso en un juicio de actas, siendo relevante que no puede fundarse la condena sólo en la aceptación de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 412 inciso segundo de dicho Código.

Así, existiendo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado, procede en este juicio dar aplicación al artículo 178 antes referido y, en consecuencia, acoger la demanda en los términos antes dichos.

**EN CUANTO A LA APELACION DE LA PARTE DEMANDANTE EN RELACION AL DEMANDADO CLAUDIO JAVIER NÚÑEZ CORTÉS:**

**DECIMONOVENO:** Que la apelación se deduce a su respecto en relación con aquella parte de la sentencia que acoge la excepción de prescripción, solicitando el demandante rechazar la misma y acoger la demanda a su respecto.

En consecuencia, en relación con el referido demandado se analizará primero la concurrencia o no de los presupuestos de la excepción y, en caso de desecharse, se analizará la procedencia que este sea condenado a indemnizar, por qué monto y la naturaleza y características de su obligación.



**VIGÉSIMO:** Que para pronunciarse sobre la excepción de prescripción, cabe tener presente que este demandado no fue condenado por el mismo delito que los anteriormente indicados, desde que se le sanciona penalmente por un hecho acotado sólo en relación a un hecho con perjuicio equivalente al monto de lo apropiado, según queda claro del considerando noveno párrafo segundo de la sentencia penal y de su parte resolutive, lo que por lo demás se condice con los dichos del imputado Misael Cortés, quien limita la participación de este demandado a estos hechos menores.

Dicho lo anterior, resulta relevante a su respecto tener en consideración para resolver su excepción de prescripción la fecha de los hechos por los cuales fue condenado, y considerando que el hecho asentado en la sentencia se establece en el informe pericial contable de la causa penal N°77/2018, el que indica que sólo se detectó respecto de este imputado una transferencia de fecha 4 de febrero de 2016, se tendrá como fecha del delito dicha fecha.

**VIGESIMOPRIMERO:** Que, por otro lado, debe tenerse presente que, como consta de la sentencia y de la causa penal, este imputado aceptó los hechos, antecedentes de prueba y el abreviado con fecha 5 de abril de 2021, y que, además efectuó dos consignaciones para reparar el mal causado con fecha 18 de noviembre de 2020, por la suma total de \$500.000, conforme al artículo 427 del Código de Procedimiento Civil y según consta de la certificación de la causa penal de fecha 17 de febrero de 2023, lo cual aparece también patente de la sentencia penal ya tantas veces referidas.

**VIGESIMOSEGUNDO:** Que, así las cosas, dando por reproducida la normativa aplicable en materia de prescripción antes transcrita y los efectos del acto de consignar para reparar el mal causado y de la aceptación de los hechos en el procedimiento abreviado antes referido en esta sentencia, y excluida que fue el mérito de la preparación de la acción civil en la causa penal para interrumpir la prescripción, teniendo presente que el delito a su respecto terminó de cometerse el



día 4 de febrero de 2016, hasta el acto siguiente que pudo producir el efecto de interrumpir la prescripción, esto es el consignar para reparar el mal causado con fecha 18 de noviembre de 2020, transcurrieron más de cuatro años, completándose el tiempo exigido para declarar la prescripción de la indemnización de los perjuicios causados por el delito en cuestión, por lo que no cabe sino acoger la excepción deducida por el referido demandado, debiendo en consecuencia confirmarse la sentencia a su respecto.

En esa situación la aceptación de los hechos manifestada al aceptar el abreviado, que tuvo lugar el 5 de abril de 2021, y la notificación de la demanda a dicho demandado, que tuvo lugar el 10 de enero del 2022, por tratarse de hechos posteriores al momento en que se cumplió el plazo de prescripción y en que se efectuó la consignación para reparar el mal causado, en nada alteran lo resuelto.

**VIGESIMOTERCERO:** Que estimando que la demandante tuvo motivo plausible para litigar sobre el punto materia de esta última apelación, atendido que al menos no resulta clara la fecha de los hechos respecto de este último demandado, no se condenará al actor al pago de las costas del recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas en esta sentencia y en los artículos 144, 160, 170, 186, 187, 223, 227, 253 y siguientes, en especial 254, 309, 178, 398, 425, 426, 427 y 428, todos del Código de Procedimiento Civil, 1.545 y siguientes, 1.698 y siguientes, 2.314 y siguientes y 2.514 y siguientes, todos del Código Civil, se declara que:

I.- **SE RECHAZA**, sin costas, la excepción de prescripción deducida por don MISAEL ANTONIO CORTÉS OLIVARES.

II.- **SE REVOCA** la sentencia apelada de fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada en causa rol C-2162-2021 del Primer Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad, sólo en cuanto acogió la excepción de prescripción deducida por doña MARÍA ANGÉLICA ROJAS GUTIÉRREZ y se rechaza a su respecto la demanda, y en su lugar se declara que **se rechaza dicha excepción**



**y se acoge la demanda**, condenando también a doña MARÍA ANGÉLICA ROJAS GUTIÉRREZ a pagar a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, en forma solidaria con los demandados don Misael Antonio Cortes Olivares y don Richard Phillip Swaneck Ramírez, la suma de \$421.809.510.- (cuatrocientos veintiún millones ochocientos nueve mil quinientos diez pesos), por concepto de indemnización de perjuicio por daño emergente, suma que generará los reajustes e intereses ya establecidos en la sentencia recurrida.

III.- **SE CONFIRMA** en lo demás apelado la referida sentencia.

IV.- Que no se condena a las partes al pago de las costas del recurso.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

**Rol 238-2024 (Civil)**

Redacción del ministro titular señor Juan Opazo Lagos.

No firma la ministra señora Virginia Soublette Miranda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo por encontrarse en comisión de servicio.



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Juan Opazo L., Eric Dario Sepulveda C. Antofagasta, diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

En Antofagasta, a diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XYDSXRXXMUE